

do mas de un mes sin que haya hecho gestion alguna, se le da por desistido á su perjuicio y se sobresee en este juicio, y considerando que el fundamento que se alega para dar por desistido á García Figueroa y sobreseer no es bastante, pues si bien los juicios de amparo deben seguirse á petición de la parte agraviada, segun el artículo 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, esto no puede entenderse sino en el caso de que el interesado no esté imposibilitado de gestionar: que presentado el ocurso de amparo y admitido como lo fué, el quejoso quedaba desde luego á disposicion del Juzgado y no podia disponerse de su persona por ninguna otra autoridad ni funcionario: que por lo mismo tan luego como el alcaide de la cárcel de Toluca dió aviso de que Bruno García habia sido llevado de la cárcel, debió ser reclamado y disponer su regreso; y que el hecho de no haber vuelto á gestionar el quejoso no puede ser bastante, atentas las circunstancias del caso, para darlo por desistido á su perjuicio y sobreseer respecto del amparo, por los fundamentos expuestos, se decreta: 1º Que se revoca el auto pronunciado el diez del presente por el O. juez de Distrito del Estado de México, que da á Bruno García Figueroa por desistido del presente juicio á perjuicio suyo y manda sobreseer en este expediente. 2º: Vuelva al juez de Distrito para que prosiga el juicio. 3º: Hágase la devolucion con copia certificada de este auto para los consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CO. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José*

García Ramirez.—*Luis Mº Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Setiembre 24 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Gregorio Torres, preso en la cárcel de Granaditas de esa ciudad, contra la sentencia que pronunció el juez de letras de Silao, condenándolo por vago á dos años de prision en esa cárcel, para que aprendiera un oficio.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

O. juez de Distrito:

El Promotor Fiscal dice: que Gregorio Torres interpuso el recurso de amparo contra la sentencia que pronunció el O. juez de letras de Silao, condenándolo por el delito de vagancia á dos años de prision en la cárcel de Granaditas para que aprendiera algun oficio, fundando su queja en que con esta sentencia se violaban en su persona las garantías individuales consignadas en la fraccion 1ª, 4ª y 5ª del artículo 20 de la Constitución Federal.

El informe que rindió el O. juez de letras de Silao, segun el artículo 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, no fué suficiente para conocer desde luego si existia ó no la violacion de las garantías individuales invocadas por el quejoso, por lo que fué preciso recibir este juicio á prueba. En este término el quejoso rindió una informacion de testigos, que únicamente se reduce á probar que ha sido militar; y que sabe el oficio de sombrerero. Esta prueba no conduce á la averiguacion de la violacion de las garantías del artículo constitucional citado, siendo necesario para este objeto comparar la ley del Estado que arregla los procedimientos que deben seguirse al juzgar á los vagos, con las disposiciones

del artículo 20 de la Constitución. La fracción 1ª de este artículo, manda: que á todo acusado se le haga saber el nombre del acusador si lo hubiere, y segun el informe del O. juez de letras de Silao procedió contra el quejoso por acusacion que hizo la Sra. Dª Homobona Fernandez, sin decir si á Gregorio Torres le hizo saber esta circunstancia; pero entre las diligencias que segun la ley 66 del Estado, que es la vigente para juzgar á los acusados de vagancia, está la declaracion del procesado, en cuya diligencia puede decirsele el nombre del acusador si lo hubiere, no puede concluirse que exista probada la violacion de la garantía de que habla la fracción 1ª de este artículo constitucional.

La fracción 4ª del mismo artículo que tambien invoca el quejoso, dispone: que al reo se le faciliten los datos del proceso que necesite para preparar sus descargos; esta prevencion cuando los datos sean declaraciones de testigos que hayan depuesto contra el reo, implica la necesidad de que se le dé conocimiento de estas declaraciones y se le presenten los testigos, que ademas, segun la fracción 3ª, debe ser cargado con ellos. El artículo 4º de la ley 66 del Estado la única prueba de descargo que admite, es la del oficio ó labor á que esté dedicado el procesado, y quiénes son los maestros ó amos con quienes trabajaba continua y efectivamente; para rendir esta prueba no es necesario conocer las diligencias del proceso, basta saber que el delito que se trata de averiguar, es el de vagancia. Esta consideracion, unida al silencio del O. juez de letras en su informe que no niega haber faltado á este precepto constitucional, demuestra; que en el proceso que por vagancia se instruyó al quejoso se ha violado la garantía constitucional de que se trata.

Respecto de la violacion de la garantía consignada en la fracción 5ª del mismo artículo, hay mas razones para creer

que ha existido, pues además de las que se han expuesto, las palabras de la ley número 96 del Estado autorizan á los jueces para hacerlo, mandando que despues de recibir la prueba de descargo que únicamente admite y ofrecida por el reo *en seguida* con sus palabras, debe hacer la declaracion de vagancia. En ninguna de las diligencias que conforme á esta ley deben practicarse, está comprendida la observancia de la garantía constitucional de la fracción 5ª del artículo 20, reduciéndose estas diligencias á una informacion de mas de tres testigos, declaracion del reo, prueba de descargo y en seguida sentencia. No está comprendida en la prueba de descargos, porque ademas de que debe abrazar los puntos que hemos dicho, son claras las palabras de la Constitución. "Que se le oiga (*al reo*) en defensa por sí ó por persona de su confianza, ó por ambos, segun su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda se le presentará lista de los defensores de oficio, para que elija la que ó las que le convengan." Por estas razones el Promotor fiscal pide al Juzgado se sirva declarar: que la Justicia de la Union ampara y protege á Gregorio Torres, contra la sentencia pronunciada por el O. juez de letras de Silao, que lo condenó por el delito de vagancia á dos años de prision en la cárcel de Granaditas, violándose con esta sentencia las garantías individuales consignadas en las fracciones 4 y 5 del artículo 20 de la Constitución Federal.

Guanajuato, Agosto 8 de 1872.—*José Aguilar y Córdoba.*"

SENTENCIA del O. juez de Distrito.

"Guanajuato, 27 de Agosto de 1872. —Visto el presente juicio de amparo promovido por Gregorio Torres contra los procedimientos del O. juez de letras de Silao, que lo juzgó y sentenció por

vago á dos años de aprendizaje forzoso en la escuela de artes establecida en la cárcel de esta capital, con violacion de las garantías que consigna el artículo 20 de la Constitución, según asegura el quejoso, y apareciendo en el testimonio del acta criminal, que se instruyó contra él y que obra en autos, que no hubo acusador en forma, del delito que se le atribuye, porque todas las personas que declararon en el progreso del juicio, inclusa la madre del acusado María Homobona Fernandez, tienen el carácter de testigos examinados de oficio ó á instancia del mismo presunto reo; de donde se infiere que no se quebrantó la fracción 1.^a del citado artículo 20 que prescribe se haga saber á los acusados el nombre del acusador, si lo hubiere; apareciendo igualmente que, aunque fueron ratificados, no fueron presentados en carreo al peticionario todos los testigos que depusieron en su contra; pues dejaron de serlo la nominada Fernandez, Eusebio Venegas, Francisco Caldera y Victoriano Anguiano, y apareciendo por último que no se le oyó en defensa, por sí ó por persona de su confianza, ó por ambos, según su voluntad, quedando así conculcadas las garantías á que se refieren las fracciones 3.^a y 5.^a del repetido artículo 20; el O. juez de Distrito, definitivamente fallando declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Gregorio Torres contra los procedimientos del O. juez de letras de Silao, en virtud de los cuales fué condenado por vago el promovente á dos años de prision y aprendizaje, con violacion del artículo 20 del Código Fundamental de la República, en sus fracciones 3.^a y 5.^a; notifíquese este fallo á las partes, pásese copia de él á la redaccion del periódico Oficial para su publicacion, y remítase lo actuado á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales, previniendo antes al quejoso reponga el papel de que se ha hecho uso con el sellado que

corresponde. Así el O. juez de Distrito lo decretó y firmó. Doy fé.—*Albino Torres.*—*Luis G. Medina.*

Son copias que certifico. Guanajuato, 29 de Agosto de 1872.—*Luis G. Medina.*

EXECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 21 de 1872.—Visto el juicio de amparo que en trece de Julio de este año, promovió ante el juez de Distrito de Guanajuato, Gregorio Torres, preso en la cárcel de Granaditas de esa ciudad, contra la sentencia que pronunció el Juez de letras de Silao condenándolo por vago á dos años de prision en aquella cárcel para que aprendiera un oficio, violando en su persona las garantías individuales que otorga el artículo 20 de la Constitución Federal. Visto el informe del juez de Silao, responsable del acto reclamado, exponiendo que acusado el reclamante de vago, se le instruyó la acta respectiva y se le condenó al aprendizaje dicho, habiendo sido el fallo que contiene esa condenacion, confirmado por la 3.^a Sala del Tribunal Supremo de Justicia del Estado. Vistos los pedimentos del Promotor Fiscal apoyando la procedencia legal del recurso: el alegato del quejoso: las constancias que para mejor proveer se trajeron á la presencia judicial de las diligencias practicadas en el Juzgado de Silao y en la 3.^a Sala del Tribunal referido, y vista por último la sentencia del juez de Distrito por la que concede el amparo á Torres, atento á que de autos resulta que no se le careó con todos los testigos que depusieron en su contra, ni se le oyó en defensa en los términos que previene la Constitución Federal, lo cual constituye una violacion de las garantías que señala que el artículo 20 de esa Constitución

ha invocado. Con arreglo á la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia mencionada del juez de Distrito de Guanajuato, que pronunció á 27 de Agosto último, declarando: que la Justicia de la Union ampara y protege á Gregorio Torres, contra los procedimientos del ciudadano Juez de letras de Sillao, en virtud de los cuales fué condenado por vago el promovente á dos años de prision y aprendizaje con violacion del artículo 20 del Código fundamental de la República en sus fracciones 3ª y 5ª.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito de donde procede con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese; y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Setiembre 24 de 1872.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México por Manuel Sandoval, contra el Gefe del cuerpo número 4 de infantería que lo retiene en el servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

O. juez:

El Promotor que suscribe en el juicio de amparo promovido por el C. Manuel Sandoval, supuesto su estado que es el

Tomo III.—Parte II.

de alegar, y haciéndolo en la forma que prescribe la ley, ante vd. dice:

Que su justificacion se ha de servir declarar en definitiva que la Justicia de la Union ampara y protege al expresado C. Manuel Sandoval contra la determinacion en virtud de la cual ha sido destinado al servicio de las armas con violacion en su persona de las garantías que otorga el artículo 5º de la Constitucion, en vista de las razones que brevemente pasa á exponer.

El quejoso, al solicitar el amparo, alega en su favor las excepciones que establece la ley de diez y siete de Mayo último para no estar obligado al servicio de las armas contra su voluntad, por ser hijo único de viuda á quien mantiene en union de dos hermanas, por medio de su trabajo.

Estas circunstancias las ha comprobado suficientemente con la prueba testimonial que se ha recibido y obra en autos, de manera que en vista de ella el que suscribe considera de su deber, en obsequio del acatamiento que se debe á las prescripciones de la ley de suspensión de garantías última, que tan benéficamente quiso atenuar la imperiosa fuerza de la necesidad del reclutamiento para robustecer la milicia encargada de combatir la revolucion, cree de su deber llamar la atención del C. juez sobre las condiciones del C. Sandoval para que le otorgue el amparo que solicita y se le conceda con tanta mas razon, cuanto que afortunadamente ha cesado el motivo para el cual se suspendieron las garantías Constitucionales. Por tanto el que suscribe pide al juez se sirva fallar en el sentido expresado, por ser de rigurosa justicia y en debido acatamiento al Código Fundamental de la República.—*Moctezuma.*